



El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. / ALBERT GARCIA

Las entidades sociales piden un “debate serio” sobre las modificaciones del IRPF

CAMILO S. BAQUERO, **Barcelona**
A las diferentes propuestas —incluso contradictorias— de ajustes fiscales que han lanzado esta semana tanto Esquerra com Convergència les han salido críticas por la izquierda. Entidades sociales y expertos piden que haya un “debate serio” sobre el sistema impositivo y la redistribución de la ri-

Desde ERC se ha propuesto una subida del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas para compensar una bajada en las más bajas. En Convergència, por otro lado, defienden que el programa electoral de la coalición independentista hablaba de una rebaja del gravamen a los contribuyentes con menos ingresos. Una de las resoluciones del último pleno contra la pobreza insta a crear figuras fiscales y a mejorar las existentes para “garantizar una mejor progresividad del sistema”.

Casanova considera una buena noticia que se empiecen a considerar más elementos progresivos dentro de la política fiscal, pero cuestiona que la reflexión se limite al IRPF y no se extienda al menos a otros tributos en los que Cataluña tiene competencias. “Se ha de mirar todo el conjunto, se necesita un debate serio”, asegura el portavoz de Fiscalidad Justa. “No se deberían lanzar ideas o globos sonda sin tener la propuesta completa, no se puede jugar con algo tan serio”, critica.

La proximidad de las elecciones

generales hace inevitable que el tema forme parte de la campaña. Desde la Mesa del Tercer Sector consideran que la reforma fiscal debería ser uno de los temas centrales de los debates y reivindicar un impuesto negativo, que volverán a presentar a los candidatos catalanes para el 26-J. “Una reforma parcial lo único que hace es limitar el debate. La pregunta aquí es si el sistema fiscal es efectivo o no y la lucha contra el fraude”, sostiene Oriol Illa, presidente de la Mesa. El impuesto negativo propuesto por las entidades socia-

les, además de gravar las grandes fortunas, implica que las personas que actualmente no declaran renta por sus escasos ingresos perciban un porcentaje de la diferencia entre su renta y el tope mínimo exento para declarar.

Cruce de peticiones

El eurodiputado convergente Ramon Tremosa se posicionó ayer en el debate sobre las modificaciones fiscales que han enfrentado a los socios de Junts pel Sí. “Si Barcelona quiere convertirse en una ciudad tecnológica y atraer a las personas que trabajan en ese campo, subir el IRPF provocará pérdidas en ingresos fiscales a largo plazo”, aseguró Tremosa en una entrevista a *Catalunya Ràdio*.

Una posición encontrada con la de los anticapitalistas. La diputada Eulàlia Reguant (CUP) defendió en TV3: “Hay que aumentar las altas. Tenemos margen para hacerlo, y estudiemos bajar las bajas, reequilibremos esto”.

les, además de gravar las grandes fortunas, implica que las personas que actualmente no declaran renta por sus escasos ingresos perciban un porcentaje de la diferencia entre su renta y el tope mínimo exento para declarar.

Argumento dudoso

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, justificó la propuesta de rebaja para echar un capote a los colectivos más necesitados. Un argumento que José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la UAB y miembro de la Basic Income European Network, considera dudoso, pues las familias en peor situación tienen unos ingresos tan bajos que no superan el mínimo para declarar.

“El principal pero que se pone en el Parlament a la Iniciativa Legislativa Popular sobre una Renta Garantizada es que no hay ingresos y Junqueras calcula que bajar el IRPF, dependiendo de la renta, costaría 650 millones de euros”, explica Noguera. “Si se quiere realmente llegar a los hogares más pobres ese dinero debería usarse para crear una renta de ayuda directa. Seguramente es más difícil de implementar, pero es más efectivo en la lucha contra la pobreza”, dice el sociólogo.

65 sanitarios de la Clínica del Vallès pasarán a dos hospitales públicos

JESSICA MOUZO, **Barcelona**
El plan del consejero de Salud, Toni Comín, de echar de la red hospitalaria pública a centros con afán de lucro comenzó ayer a tomar forma. El titular de Salud desglosó cómo ejecutará la expulsión del primer hospital, la Clínica del Vallès (CdV), propiedad del grupo Quirónsalud. La medida no supondrá, tal y como advirtió la empresa, ningún despido en la CdV. El Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) y el Parc Taulí de Sabadell, los dos centros públicos que asumirán la actividad derivada, absorberán también a los 65 trabajadores que empleaba la CdV para realizar esa asistencia pública.

Con la amenaza de Quirónsalud de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 110 personas, Comín salió al paso para corregir las cifras de empleados afectados por la medida y asegurar que ninguno sería despedido. Los trabajadores recolocados verán mejoradas sus condiciones laborales porque entrarán a formar parte del Taulí bajo el mismo régimen que el resto de sanitarios del hospital público.

Tal y como avanzó EL PAÍS, a partir del 16 de agosto —el 15 finaliza el contrato con la CdV— comenzará el traslado de pacientes al Taulí y al CST, que se hará de forma progresiva durante un año. Así, para asumir los 3.600 ingresos públicos que hasta ahora hacía cada año la CdV (con un presupuesto de 7,5 millones), Salud calcula que tendrán que abrir al menos 37 camas y tres quirófanos entre los dos hospitales públicos. El Taulí asumirá el 65% de esa actividad y el CST, el otro 35%.

Collboni llevará BSM, la promoción económica y cultura

Mòdol se encargará de la dirección de Arquitectura y Ballarín, de Comercio

VIENE DE LA PÁGINA 1

A la pregunta a Colau de si pasar de 11 concejales a 15, todavía lejos de la mayoría de 21, sirve de mucho, la alcaldesa dijo: “15 concejales no son 21 pero tampoco son 11”. Sobre la reacción de ERC y la CUP a futuras votaciones, Colau dijo: “Le tomo la palabra [al republicano] Alfred

Bosch, que dice que hay que hablar con la ciudad por delante”. “Su aportación ha sido positiva en los últimos meses, necesitamos mayorías amplias y tendemos la mano a todos los grupos”, remachó Collboni.

Tanto Colau como Collboni admitieron ayer que alcanzar el pacto “no ha sido fácil”. El cartapacio

ha sido la negociación más compleja en unas conversaciones cuyo peso han llevado desde enero —y con la interrupción del presupuesto— por parte de Barcelona en común el gerente, Jordi Martí, el concejal Eloi Badia y el jefe de Gabinete de la alcaldesa, Manu Simarro; y por parte del PSC el jefe de gabinete y coordinador del grupo municipal, Salvador Ila, el secretario de organización de la Federación de Barcelona Carlos Prieto y el propio Collboni.

La alcaldesa defendió que han evitado que los partidos controlen áreas enteras: “No hemos hecho compartimentos estancos, sino de forma transversal, para compartir responsabilidades”. Pero la alcaldesa mantiene el control sobre prensa y comunicación, seguridad y prevención y los planes de barrios y Besòs. Su hombre fuerte y portavoz seguirá

siendo Gerardo Pisarello, teniente de alcalde de Economía, Trabajo y Planificación Estratégica, que controlará las relaciones internacionales, los planes de empleo, presupuestos, Hacienda, Barcelona Activa, las políticas de Memoria Histórica y el IMI.

Collboni será el segundo teniente de alcalde de Empresa, Cultura e Innovación. Desde aquí controlará las políticas de promoción económica de la ciudad (la presencia municipal en la Feria o la Fundación Mòbile), coordinará la comisión Ayuntamiento - Generalitat y la mayor empresa municipal, BSM. De Collboni dependerán las áreas de comercio y mercados, que capitaneará la concejal Montse Ballarín, y el comisionado de Cultura, que elegirá el PSC para un área que seguirá sin concejal.

En el ámbito de Urbanismo, la

tenencia la seguirá capitaneando Janet Sanz, y Daniel Mòdol será concejal de Arquitectura, Paisaje y Patrimonio: dirigirá el instituto municipal de Paisaje Urbano, la dirección de Patrimonio y la de Arquitectura (en el cartapacio no figura la denominación de Arquitecto Jefe, un cargo que en el pasado ha tenido un gran peso o ha sido controvertido, según los mandatos). Los socialistas también tendrán la concejalía de Infancia, Juventud y Mayores (renombrada, porque nadie entendía muy bien qué significaba “Ciclos de Vida”), bajo la responsabilidad de Carmen Andrés, que colgará de la tenencia de Derechos Sociales que dirige Laia Ortiz y que mantiene la tutela sobre vivienda. El pacto deja en manos del PSC tres distritos que ahora dirigen tenientes de alcalde: Sant Andreu, Eixample y Sarrià.